

*Honorable Presidente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos,
Respetables Miembros de la Comisión,
Señores peticionarios:*

El Estado ecuatoriano se encuentra hoy representado por el Canciller de la República, Ec. Ricardo Patiño, el Presidente de la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional, asambleísta Mauro Andino, la Ministra de Justicia, Dra. Johanna Pesántez, y quien les habla, Diego García Carrión, como Procurador General del Estado y, como tal, representante judicial del Estado.

El Estado ecuatoriano ha acogido la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a esta audiencia pública sobre Libertad de Expresión en el Ecuador, en el marco del artículo 62 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permite a la Comisión tratar asuntos generales sobre derechos humanos en un Estado parte.

Debo dejar en claro que si bien se nos ha convocado para tratar sobre el tema de la libertad de expresión en el Ecuador, la elaboración de la ponencia de los peticionarios se construye sobre casos particulares, que no pueden ser tratados en una audiencia como ésta.

La República del Ecuador está dispuesta a discutir sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pero advierte que éste no es el espacio ni el tiempo adecuado para discutir casos particulares, menos aún si estos se encuentran sometidos a la justicia ordinaria ecuatoriana, dentro del marco de la Constitución y la Ley, pues no cabría que la Comisión o cualquier otro organismo internacional,

interfiera con la administración de justicia de un país soberano.

La República del Ecuador advierte en los peticionarios la intención de utilizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un escenario a donde trasladar la discusión política del país, y pide a la Comisión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mantenerse alertas frente a cualquier intención de darle un uso político a los mecanismos del Sistema.

Nos estamos acostumbrando, cada vez más, a escuchar que determinados hechos van a ser discutidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aun antes de que sean planteados internamente. Con la mediatización de los conflictos en el Sistema Interamericano, muchos buscan más generar la noticia de la presentación de un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el resultado de su trámite o gestión.

El Estado ecuatoriano, como país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, estima que ésta es una valiosa oportunidad para informar a la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y los avances que éste ha realizado en la materia, como lo ha venido haciendo en las oportunidades anteriores en que ha sido convocado a este foro.

Como se verá en el transcurso de las exposiciones de los agentes del Estado, el Estado ecuatoriano ha garantizado efectivamente el derecho a la libertad de expresión, pero lo ha hecho tanto en su dimensión individual, como también en su dimensión social, entendiendo la libertad de expresión como un derecho colectivo y fundamental para la

democracia, que debe ser ejercido desde una perspectiva de igualdad y no discriminación.

La Constitución de la República vigente desde octubre del año 2008, en su Art. 16 número 1, prevé el derecho a la comunicación de todas las personas, como una garantía de acceder a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. En este contexto, la Constitución busca garantizar, desde una perspectiva integral, el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información para los ecuatorianos.

Así, el Art. 18 número 1 del texto constitucional ecuatoriano consagra el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.”

Esta disposición constitucional se ajusta plenamente a los principios que, sobre libertad de pensamiento y expresión, prevé el Art. 13 números 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuestra Constitución, al igual que la Convención, garantiza el derecho a la libertad de comunicación, sin que exista la posibilidad de una censura previa, pero con responsabilidad y respeto respecto de la honra y de la dignidad de los demás, otro derecho protegido por la Convención, en su Art. 11 número 1.

Por supuesto, no estamos hablando sólo de principios constitucionales en abstracto, si no de principios constitucionales que se cumplen. En el Ecuador existe libertad de expresión y existe libertad de comunicación, en tanto es perfectamente posible que, a través de los medios de comunicación, se expresen cuantas ideas o pensamientos

tengan cabida en ellos. De hecho, basta con ver o escuchar los programas de noticias u opinión de los medios radiales o televisados o leer los medios impresos o sus versiones electrónicas, para constatar que estos pueden, libremente, aun abusando de este derecho, manifestar todos sus pensamientos. Esto sucede todos los días en el Ecuador.

Por otro lado, la Constitución de 2008 pone especial énfasis en la inclusión y participación de grupos vulnerables o minoritarios en cuanto al acceso de frecuencias, fortalecimiento de medios públicos y comunitarios, y la eliminación progresiva de monopolios y oligopolios mediáticos.

Así, el Estado ha ampliado el espectro de protección individual del derecho a la libre expresión hacia una perspectiva social que debe ser ejercido y entendido a partir de su utilidad para el desarrollo democrático del Estado, con el fin de disminuir situaciones de exclusión de grupos vulnerables en el acceso a medios de comunicación.

El Estado ecuatoriano tiene claro que el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión no puede hacerse aisladamente de la normativa internacional de derechos humanos en la cual éste se encuadra, pero debe guardar coherencia con el resto de derechos que el Estado debe respetar y garantizar.

Entiende el Estado que el derecho a buscar, recibir e impartir información, consagrado en el artículo 13 de la Convención, no puede cumplir su objetivo fundamental dentro de una sociedad democrática si no guarda una estricta coherencia con el derecho a la igualdad y no discriminación, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana en las Opiniones Consultivas OC-17 y OC-18, en el sentido de que “el derecho a la igualdad y no discriminación no puede ser

entendido solo como una restricción hacia el Estado de no incurrir en prácticas discriminatorias, sino que le impone la obligación de adoptar normas, políticas y prácticas destinadas a asegurar que aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desventaja puedan ejercer efectivamente sus derechos en iguales condiciones que el resto de ciudadanos”.

En esta misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó, en su “Informe sobre estándares para una radiodifusión libre e incluyente del año 2009”, que “los Estados deben adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

En el contexto de estos estándares, el Estado ecuatoriano ha asumido la obligación de garantizar que todos sus ciudadanos puedan acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a todos los mecanismos disponibles para la difusión y transmisión de ideas.

En igual sentido se ha venido pronunciando la Corte Interamericana desde su primera jurisprudencia en la materia, en la Opinión Consultiva OC-5, al referirse a la dimensión social que tiene el derecho a la libertad de expresión, indicando que “este derecho no solo protege a quien imparte o difunde un criterio u opinión de manera individual, sino que de manera colectiva ampara a la sociedad como un todo, en su derecho a buscar y recibir información”.

De igual manera, el Estado ecuatoriano ha entendido el papel fundamental que tienen los medios de comunicación

para el efectivo desarrollo de una sociedad democrática. Como lo indicó ya la Relatoría Especial en su “Informe sobre ética en los medios de difusión” del año 2001, éstos tienen “obligaciones y responsabilidades al momento de ejercer su derecho a la libertad de expresión”. La Relatoría manifestó en dicho informe su particular preocupación por ciertos casos de “omisión de verificar adecuadamente la exactitud de las noticias”, entre otras observaciones.

Como lo mencionó la Relatoría Especial en el “Informe sobre ética en los medios de difusión” citado anteriormente, el Estado está obligado a tomar medidas para “salvaguardar otros derechos básicos que pueden verse amenazados o dañados por un uso indebido del derecho a la libertad de expresión”.

Lo anterior implica, por tanto, que este derecho tiene límites, conforme lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Convención, que indica que el derecho a la libertad de expresión está sujeto a responsabilidad ulterior “para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

En concordancia con lo expuesto, el Proyecto de Ley de Comunicación, en debate en la Asamblea Nacional, pretende sustituir a la vigente Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, una normativa emitida durante la dictadura militar en Ecuador, que observa solamente criterios técnicos de asignación de frecuencias y deja de lado consideraciones de tipo social y estándares de libertad de expresión.

El mencionado Proyecto de Ley incorporará el derecho a la libre expresión no solo desde su dimensión individual sino, y sobre todo, desde la perspectiva social y comunitaria, tal

como ha sido entendido en el Artículo 16 de la Constitución del Ecuador.

Por su parte, la consulta popular del 7 de mayo de 2011, planteó como interrogante al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo con prohibir a las instituciones del sistema financiero privado, así como a las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, que sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, como consecuencia de lo cual, se reformó el Art. 312 de la Constitución de la República.

En cuanto a la figura penal del desacato, el Estado ecuatoriano ha venido trabajando ya en su eliminación de la legislación penal, y en esa dirección ha incluido esta propuesta en el Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, remitido recientemente a la Asamblea Nacional.

Para continuar con la exposición del Estado ecuatoriano, cedo la palabra al Canciller de la República del Ecuador.

Dr. Diego García Carrión
Procurador General del Estado
República del Ecuador¹

¹ Tercera audiencia temática sobre la “Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador”, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Secretaría General de la OEA, Washington D.C. 25 de octubre de 2011.